

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política, económica y social

La coalición de gobierno de Rumanía, constituida como se sabe por las dos formaciones políticas que obtuvieron un mayor número de votos durante las elecciones de noviembre pasado, ha empezado a acusar sus primeros problemas durante el mes de marzo debido fundamentalmente a la situación económica y social que tiene su origen en la crisis económico-financiera que está empezando a descargar todo su peso sobre la Europa del Este.

En Rumanía, la situación económica se ha deteriorado rápidamente en los primeros meses del año. El Presupuesto del Estado fue aprobado contra reloj en febrero del 2009, aunque ya los analistas advirtieron que los objetivos de 2% de déficit y 2,5% de crecimiento eran imposibles. En cuanto a la situación general, el "boom" de la construcción se ha detenido en seco, la industria de automoción sufre el mismo declive que en el resto de Europa, igual que la del hierro y el acero. El consumo ha caído un 23% en los dos últimos meses. El negocio inmobiliario ha dejado de crecer y ha descendido en un 20% por primera vez en cinco años y los precios de la vivienda están empezando a bajar. Las exportaciones han caído un 25% en los tres primeros meses del año y la balanza por cuenta corriente alcanza ya un déficit superior al 11%. En ausencia de mercados internacionales, el mercado interno, sofocado por la ausencia de recursos financieros, ha reducido el consumo en una cifra que se aproxima al 20% según datos del mes de marzo. El paro, apenas cifrado en un 5,6% en el mes de marzo, se vislumbra como otro elemento desestabilizador en un futuro cercano, tras las previsiones que amenazan casi con duplicar esta cifra a final de año.

Si bien la situación en Rumanía no ha alcanzado la gravedad que en su vecina Hungría o en la algo más lejana Letonia, este país es el tercero de la región que se ha visto obligado a solicitar una ayuda a las instituciones financieras internacionales y principalmente al Fondo Monetario Internacional.

Como resultado, Rumanía va a percibir un total de 19.900 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma: 12.900 millones del FMI, durante dos años, destinados a cubrir las reservas de divisas del Banco Nacional y sostener así a la divisa nacional. Otros 5.000 millones de euros, del Banco Europeo para el Desarrollo, para financiar el déficit presupuestario y finalmente otros 1.500 millones del Banco Mundial.

La llegada del dinero del FMI permitirá liberar las reservas congeladas del Banco Nacional (que actualmente alcanzan el 40% de los fondos de que dispone el Banco) que se supone podrán ser utilizado en forma de créditos para la economía rumana. Pero también existe la posibilidad de que los bancos extranjeros a los que van destinadas, las transfieran a su central u otras sucursales en el extranjero donde existan problemas más graves de liquidez. Los reglamentos europeos concernientes a la libertad de circulación de capitales no permiten poner trabas a que esto ocurra, por lo que los mayores esfuerzos negociadores de la diplomacia

rumana en estos momentos se centran en convencer a los bancos y gobiernos extranjeros con intereses financieros en Rumania de que renuncien a hacer uso de esa prerrogativa.

La situación se presenta, pues llena de incertidumbre, lo que tiene un reflejo inmediato en la situación política y en la inestabilidad social. No en vano, un informe de Economist Intelligence Unit, publicado por The Economist, sitúa a Rumanía en el puesto número 66 en un índice de 95 países con grave riesgo de inestabilidad.

La primera consecuencia de esta medida en el orden político ha sido la toma de posición del PSD (una de las fuerzas políticas de la coalición) que, en un claro intento de desmarcarse de la misma, ha criticado la decisión de solicitar ayuda financiera internacional e incluso ha acusado al PDL, su socio en el Gobierno, de haber tomado esta decisión de manera unilateral y sin consultar previamente a la otra parte de la coalición.

Poco a poco se van conociendo las condiciones impuestas por las instituciones financieras, a saber: un máximo de 4,5% de déficit presupuestario. Congelación salarial y moderación en el incremento de las pensiones, debido a la gran presión de éstas últimas sobre el presupuesto. Reforma fiscal y reestructuración del sistema salarial de los empleados públicos y, en particular, reducción de los complementos salariales (que actualmente alcanzan la cifra de 68 conceptos distintos).

Las primeras respuestas por parte de los sindicatos no se han hecho esperar, en forma de planteos y paros de los empleados públicos y de los pensionistas, que ven así frustradas no sólo las quiméricas promesas escuchadas durante la última campaña electoral sino también las perspectivas de crecimiento más razonables.

No es extraño que el PSD, ante la amenaza de que proliferen la protesta e incluso la conflictividad social esté enviando señales al electorado, e incluso a su propio partido, intentando desmarcarse de las medidas más impopulares. Vano intento, habida cuenta de que siguiendo una pauta tradicional, el PSD se ha hecho cargo de los departamentos ministeriales con un contenido más social, siendo precisamente el Ministerio de Trabajo, Familia y Protección Social, dirigido por un Ministro del PSD, el principal encargado de llevar adelante las medidas más importantes y, entre ellas todas aquellas que se refieren a la reestructuración de los salarios de los empleados públicos y el freno al incremento de las pensiones. Como complemento, el Ministerio de Trabajo se ha hecho cargo también muy recientemente del Diálogo Social, que hasta hace poco más de un mes seguía en manos de la Presidencia del Gobierno.

En un intento de dar “una de cal y otra de arena”, el Ministerio de Trabajo ha aireado recientemente la creación de una pensión mínima, aunque con un importe no superior a los 300 lei (escasamente unos 70 euros al cambio actual). No obstante lo exiguo de esta cuantía mínima, de la situación de las pensiones en este país da una idea el hecho de que esta medida puede afectar a unos 800.000 pensionistas, cuya pensión (la mínima) continuará siendo 100 veces más pequeña que la máxima, disfrutada por escasamente un 2% de los pensionistas del país.

Otra de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno es la de reestructuración de la estructura salarial del sector público, para lo cual ha dictado una Ordenanza de Medidas urgentes cuyo contenido está tratando de consensuar entre los diferentes sindicatos de empleados públicos, a través de una nueva Ley de "salarización", que ponga orden y consiga unificar, simplificándola, la estructura salarial de los empleados públicos.

Por último, establecido el tope de 4,5% de déficit público, el Gobierno se ha lanzado afanosamente a grandes reducciones en el presupuesto. El cumplimiento efectivo de los objetivos presupuestarios supone que un 20% del mismo vaya a parar a las necesarias inversiones que necesita este país para acometer una más que necesaria etapa de modernización. El coste de estas inversiones se pretende financiar con fondos comunitarios, para lo que en el presente ejercicio debería captarse una cifra no inferior a los 10.000 millones de euros. Teniendo en cuenta de que en el 2008 Rumania tan solo consiguió captar 4.000 millones y de que algunos analistas no ven posible que en el 2009 se pueda superar la mitad de esta cifra, queda claro que, o bien habrá que ralentizar el programa de inversiones o bien exponerse a superar la cifra de déficit. Los recortes presupuestarios emprendidos por el Gobierno de Emil Boc parecen orientados a conjurar ese sombrío panorama.

Un último rasgo a tener en cuenta para valorar la situación política es la convocatoria de elecciones presidenciales prevista para finales de este año. La coalición de Gobierno puede acusar las consecuencias de esta situación que serán más graves conforme se vaya aproximando la cita electoral. De momento, las más importantes formaciones políticas han anunciado ya sus candidatos. El PDL pretenderá revalidar al actual Jefe del Estado, Traian Basescu. Por su parte, el PSD ya ha designado candidato a su actual presidente, Mircea Gheoana, también presidente del Senado. El PNL, frustrado aspirante a partido "bisagra" acaba de sufrir su propia catársis, defenestrando a su antiguo líder y también primer ministro desde el 2004 al 2009, Calin Popescu Tariceanu. Por último, para terminar de dibujar el panorama político pre-electoral, cabe mencionar que el Príncipe Radu Duda, casado con la primogénita del Rey Mihai de Rumanía, primera en la línea sucesoria, anunció hace algunos días su intención de presentarse a las elecciones presidenciales. La aparición del Príncipe Radu en la escena política ha sido valorada por algunos comentaristas como un intento de los enemigos políticos de Traian Basescu próximos al PNL, de dispersar los votos de la derecha para complicar su victoria.